

blar de interpretaciones «legalistas» y «psicologistas» y de la explicación «total» al modo de la sociología de la escuela de Frankfurt, Marsal dice que «en una catástrofe en que intervienen veintitantos vehículos es inútil pensar en la responsabilidad de Juan, José o Pedro. Las causas son estructurales y son los que manejan y deciden sobre las estructuras los que deben rendir cuentas ante la sociedad», tras haber mencionado que «en la hecatombe dominical de la autopista A-17 hay un primer culpable "total" que se nos escapa y es el tipo de "civilización del automóvil" en que todos estamos envueltos y en la que nos hemos visto metidos sin poder participar en su gestación ni tan siquiera ser oídos. Pero hay también unos culpables estructurales de nuestra área que sí está a nuestro alcance enfrentar. Me refiero al trazado de las autopistas, a la falta de seguridad en ciertos tramos, a la contaminación que incrementa la niebla en otras».

En contraste con el análisis y denuncia de una realidad que Marsal efectúa, una voz se ha alzado en defensa de la casualidad pura y caprichosa. Se trata de un párrafo que parece sacado de una revista de humor negro. Lo firma «El concejal fantasma» en una sección titulada «Español popular» publicada en **La Prensa**, diario vespertino de la Cadena de Prensa y Radio del Movimiento en Barcelona. Para el anónimo firmante «una veintena de coches y autobuses se han alcanzado. Alguno de ellos se incendió. Muchos heridos y siete irrecuperables. Fue la niebla. Y ahí termina todo», y añade: «Yo me pregunto si en estas autopistas en que cien metros cuestan cien millones de pesetas, con sus raffles protectores, con su asfalto impecable, con su vigilancia, servicios de socorro y un teléfono a cada kilómetro, no se les podría agregar un altavoz que en momentos en que la visibilidad es deficiente fuera dando instrucciones, de por qué vía o carril se ha de circular, y a qué velocidad». ■ **PABLO MORATA.**

¿Se puede vivir en España?

● Prescindamos por una vez de vagas consideraciones retóricas y atengámonos a la fría realidad de los números. Tropezamos estos días con cifras verdaderamente estremecedoras. Con un aumento de cerca de ciento cincuenta mil millones sobre el año pasado, los presupuestos de gastos e ingresos del Estado español se cifran para 1976 nada menos que en 785.000 millones de pesetas. Lo que significa, dicho en lenguaje llano y comprensible, que cada uno de los treinta y cinco millones de españoles habremos de pagar al Tesoro alrededor de las veintitrés mil pesetas. Como por regla general una familia se compone de cuatro personas —matrimonio y dos hijos—, el total familiar a satisfacer se elevará a 92.000 pesetas anuales. Y si tenemos en cuenta que el salario mínimo de que «disfrutan» la mitad de los trabajadores no llega a las 300 pesetas diarias, el obrero que tenga tres hijos no ganará lo suficiente para satisfacer su parte alcuota familiar de los gastos estatales.

Hay todavía bastante más y más grave. Si sumamos a esos 785.000 millones los cientos de miles de millones que anualmente nos cuesta la Seguridad Social, los gastos de instalación y las cuantiosas pérdidas de las grandes empresas nacionalizadas, municipalizadas o socializadas —Renfe, Iberia, Hunosa, etcétera, etcétera—, más los muchos miles de millones de los cincuenta presupuestos provinciales y los millares de presupuestos municipales, duplicaremos con creces la cifra presupuestaria nacional. Modestamente, muy modestamente, podemos cifrarla en billón y medio de pesetas. O, dicho en nú-



meros, 1.500.000.000.000. Es una cantidad verdaderamente astronómica.

Si dividimos dicha cantidad por los treinta y cinco millones de españoles, comprobaremos que a cada uno nos corresponde abonar en el año de gracia —¿o de desgracia?— de 1976 alrededor de las cuarenta y seis mil pesetas. Como esta cifra habrán de satisfacerla no sólo los varones en edad de trabajar —aunque muchos no trabajen—, sino también los ancianos, las mujeres y los niños, tendremos que los pagos de una familia normal —cuatro personas— ascenderán a 184.000 pesetas, cantidad que casi duplica lo que ganan más de la mitad de los obreros y campesinos españoles.

Cabe otro enfoque distinto de estas cifras, con resultados igualmente impresionantes. Con un exceso de optimismo, se nos ha asegurado que la renta per cápita de los ciudadanos españoles se acerca, cuando no supera, los 2.000 dólares anuales. Indudablemente, hay en esta afirmación un triunfalismo semejante al habitual y corriente de considerar turistas a los trabajadores hispanos que laborando en el extranjero vienen a visitar a sus familiares, o a los obreros marroquíes o argelinos que cruzan España para ir o volver de sus lugares de ocupación en Francia o Alemania. En realidad, según otros cálculos menos ilusorios, los ingresos por persona son bastante más modestos, ya que la renta nacional bruta —aunque a veces se hable y especule con cuatro o cinco billones— sobrepasa poco los dos. Pero aun admitiendo —que no es poco admitir— que llegue a los dos billones cuatrocientos mil millones, los ingresos individuales no sobrepasarían las 80.000 pesetas. Con la terrible desigualdad de que si unos ingresan —trabajando o sin trabajar, casi siempre este último— diez, quince o veinte millones de pesetas, hay doce o catorce millones de españoles —mujeres de todas las edades, niños menores de quince años y ancianos mayores de ochenta— que no disfrutan de ingresos personales de ninguna clase.

Pero, prescindiendo de los casos particulares para examinar el grave problema en su conjunto, tendremos que el billón y medio que se lleva la Administración deja tan sólo 900.000 millones para alimentar, vestir, alojar, viajar, educar y entretener a los treinta y cinco millones de habitantes de nuestro país. Es decir, que el Estado, la Seguridad Social, las empresas pa-

raestatales, las Diputaciones y los municipios se llevan el 65 por 100 del producto nacional bruto y que los ciudadanos no disponen para cubrir todas sus necesidades más que del 35 por ciento restante.

¿Es posible vivir en estas condiciones? ¿No resulta excesivamente cara la Administración que disfrutamos o padecemos? ¿Cómo vivirá en España el ciudadano medio en 1976? No creo que las respuestas ofrezcan grandes dudas. ■ **EDUARDO DE GUZMAN.**

STANDARD Y METRO

Un desafío a la congelación de salarios

● La huelga que la víspera de Reyes paralizó el Metro de Madrid, el encierro de dos mil quinientos trabajadores de este servicio y familiares suyos en la Parroquia de Nuestra Señora de Luján del barrio del Pilar, en los momentos del cierre de la edición de este número, se ha producido a las pocas horas de haberse perdido las primeras esperanzas de un acuerdo entre trabajadores y empresa de Standard. Ambos conflictos son el mayor desafío a la reciente política de congelación de salarios.

La huelga de Standard dura ya más de un mes. Se inició el 4 de diciembre, es decir, a partir de la primera reunión para la deliberación del quinto convenio colectivo de la empresa. En este tiempo se ha llegado a más de sesenta mil horas diarias de huelga, a más de un millón de horas de huelga en total.

Standard-ITT, con sus diversas instalaciones y factorías de Ramírez de Prado, Villaverde, Méndez Alvaro, Barajas..., es la mayor empresa madrileña. Cuenta con factorías en Toledo, Malillaño (Santander) y cuatro mil empleados para ▶